

AMPARO.

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa por D^a Eleuteria Ramirez de Salazar, contra el administrador de la aduana terrestre de Mazatlán, que se niega á recibirles en moneda de cobre la cantidad de setenta y un pesos de que es deudora al Estado, por contribuciones.

PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: Doña Eleuteria Ramirez dueña de unos cuartos por los que ha causado \$71 de contribuciones directas, ha ocurrido á este Juzgado, solicitando amparo contra los procedimientos del ciudadano Administrador de la Aduana terrestre de este Puerto, que le cobra dicha suma y no le admite en pago moneda de cobre. Funda su queja en los arts. 27 y 72 frac. 23 (segun parece) y 11 frac. 3^a de la Constitucion general de la República.

Dice que la moneda de cobre, no circula en virtud del decreto núm. 35 fecha 31 de Diciembre de 1872 expedido por la Legislatura del Estado; pero que la inconstitucionalidad de tal, decreto es cuestion ejecutoriada por la sentencia que en caso idéntico pronunció la Suprema Corte amparando contra igual violencia á Don Vicente Ferreira, y pide se le ampare y proteja, mandándose que la Aduana terrestre le reciba en pago de las contribuciones que adeuda y las que adeude en lo sucesivo, en moneda de cobre.....

Como se vé, la Señora quejosa creó que se le ha expropiado y que el Estado ha invadido las facultades federales puesto que cita los arts. 27 y 72 frac. 23 de la Constitucion general; pero como tambien cita el art. 11 frac. 3, (cuyo artículo que no tiene fracciones) trata de la libertad que todo hombre tiene para entrar y salir de la república, viajar y mudar de residencia etc.;

el fiscal creó que se ha incurrido en un error al hacer esta cita.

Equipara á la Sra. Ramirez el juicio del Sr. Ferreira con el caso que le ocurre á ella, y asegura que es igual la violencia que una y otro han resentido; mas basta considerar que el Sr. Ferreira se quejaba por que quisieron venderle papel de la contribucion federal con moneda de cobre, y que la Sra. Ramirez se queja de que se le cobra contribuciones, excluyendo la moneda de cobre en virtud de un decreto del Estado, para ver que la identidad no es tan exacta.

Pide finalmente amparo, no solo por lo presente, sino tambien para lo futuro; y pide suspension del acto conforme al segundo aparte del art. 59 de la ley de 20 de Enero de 1869, aunque sin probar ni indicar de manera alguna la urgencia que supone el aparte, como se llama el segundo parrafo del artículo citado.

El ocurso esta presentado en papel del sello 59 para actuaciones; pero como desde luego se vé por el mismo ocurso, que la Señora es dueña de una propiedad por la que ha causado \$71 de contribuciones, y que la ley de amparo en su art. 29 solo permite el uso de papel comun á los notoriamente pobres; y como esto no consta de ninguna manera, es claro que indbidamente se ha admitido y proseguido el juicio en papel de pobres.

El juzgado no creyó procedente desde luego la suspension del acto reclamado; pero por la respuesta que dió la quejosa de ser suma y notoriamente pobre, agregando á la vez, que si no se le admitia por tal desistiría de su solicitud; el juzgado tuvo á bien mandar suspender las providencias del cobre, asegurando que quedara la hacienda del Estado con el embargo de bienes. El Administrador mandó suspender las providencias, y evacuando posteriormente el informe que se le pidió por auto de 20 del corriente, hoy ha pasado el negocio al que suscribe para los efectos del art. 99 de la ley de amparos vigente.

El Promotor fiscal se ocupará desde luego de examinar si procede ó no el amparo que solicita la S^a Ramirez, prescindiendo de que solo estan citados los artículos constitucionales que se dicen infringidos por los procedimientos del Administrador de la Aduana terrestre; pero de ninguna manera razonados los fundamentos de la queja como antes deja indicado; mas al recorrer el informe rendido por aquel funcionario, se advierte, que los cobros que se hacen á la S^a Ramirez son dos años anteriores á la expedicion del decreto de 31 de Diciembre de 1872, es decir: que D^a Eleuteria Ramirez pudo muy bien, si lo hubiera querido, haber pagado en moneda de cobre sin que en su persona se hubiera violado ninguna garantía, ni invadido la legislatura la órbita de facultades federales, pues que no fue separada dicha moneda de la circulacion, ni excluida su admision, sino hasta la fecha del decreto de 31 de Diciembre de 1872.

Por consiguiente, antes de poder dar su parecer el fiscal sobre lo principal del amparo solicitado por la S^a Ramirez, seria preciso que se recibiera este negocio á prueba para averiguar de que tiempo datan los adeudos que hoy cobra la Aduana terrestre, excluyendo la moneda de cobre.

Ademas: la S^a Ramirez parece que debe reponer el papel gastado con el sello tercerro que corresponde, y no seguir usando el 5^o mientras no justifique su insolvencia por los medios legales.

Mazatlan, Julio 2 de 1874.—*L. Guona.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Mazatlan, Setiembre 29 de 1874.—Visita la demanda de amparo que la S^a Doña Eleuteria R. de Salazar, viuda, mayor de edad, y de esta vecindad, se presentado ante este juzgado contra el acto del Administrador de la Aduana terrestre de esta ciudad, por el que se niega á recibir en moneda de cobre que antes circulaba en el Estado, la cantidad de \$71 que le exige por

contribuciones directas: el informe rendido por dicho Administrador, en que reconoce como cierto el hecho en que se funda la demanda, y lo explica diciendo: que ha obrado de acuerdo con la frac. 23 del art. 1^o de la ley del Estado de 27 de Diciembre del año próximo pasado, que previene se paguen todas las contribuciones del mismo en moneda de plata; y que para dictarla, tuvo facultad el Estado, porque la Constitucion general no obliga á los Estados á recibir sus contribuciones en determinada moneda.

Considerando: que la frac. 23 del art. 72 del pacto federal, encomienda al Congreso de la Union la facultad de legislar sobre las condiciones de la moneda, en las que estan comprendidas las reglas de circulacion; y que es una limitacion de estas, el excluir la de cobre del pago de contribuciones del Estado: que el art. 117 del mismo pacto, limita las facultades de los Estados á todo aquello que no esté reservado á los poderes de la Union: que por tales razones, la disposicion del de Sinaloa que excluye la moneda de cobre del pago de sus contribuciones, importa una innovacion de las facultades del Congreso general.

Considerando: que los poseedores de la moneda de cobre tienen derecho de que se les reciba por el valor con que se emitió, y la exclusion que de ella ha hecho la ley del Estado, aplicada por el Administrador al caso propuesto, importa para la S^a Ramirez una expropiacion no indemnizada previamente. Con fundamento de los arts. 27 y 101 frac. 1^a y 3^a de la Constitucion; 1^o frac. 1^a y 3^a de la ley de 20 de Enero de 1869 y demas indicados, se resuelve:

La Justicia de la Union ampara y protege á la S^a Doña Eleuteria Ramirez de Salazar, contra el acto del Administrador de la Aduana terrestre de esta ciudad, que se niega á recibirle en moneda de cobre, la cantidad de \$71, en pago de contribuciones directas. Hágase saber; remítase copia de esta sentencia al *Semanario Judicial*, otra

al periódico de esta ciudad y los autos originales á la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, para su revision.

El C. Lic. Joaquin García, segundo suplente del Juzgado de Distrito de Sinaloa, definitivamente juzgando, así lo proveyó y firmó.—Doy fé.—*Joaquín García*.—*Francisco Medina*, secretario.

Es copia.—Mazatlan, Octubre 15 de 1874.—*Francisco Medina*,—secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Diciembre 10 de 1874.—Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa por Doña Eleuteria Ramirez de Salazar, contra el Administrador de la Aduana terrestre de Mazatlan, que se niega á recibirle en moneda de cobre la cantidad de \$71 de que es deudora al Estado por contribuciones; manifestando la quejosa, que con el decreto expedido por la Legislatura de Sinaloa en 31 de Diciembre de 1872, en cumplimiento del cual, no se le admite el pago en moneda de cobre, se ha invadido la esfera de la autoridad federal, determinada en los arts. 72 frac. 2º y 111 frac. 3º de la Constitucion de la República, y con la aplicacion que del mismo se hace á su persona, se vulnera la garantía consignada en el art. 27 de la misma Constitucion: visto el informe de la autoridad; el parecer fiscal; el fallo del inferior, con cuanto más se tuvo presente y ver convino. Por sus mismos y legales fundamentos, se confirma la sentencia pronunciada por el Juez 2º suplente de Distrito en 29 de Setiembre del presente año, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á la Sª Doña Eleuteria Ramirez de Salazar, contra el acto del Administrador de la Aduana Terrestre de Mazatlan, que se niega á recibirle en moneda de cobre, la cantidad de \$ 71 en pago de contribuciones.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su

origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias*.—*M. Auza*.—*Juan J. de la Garza*.—*José Arteaga*.—*Ignacio Ramírez*.—*Manuel de Castañeda y Nájera*.—*Luis Velazquez*.—*M. Zavala*.—*José García Ramírez*.—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, 22 de Diciembre de 1874.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Durango, por Francisco Nájera, contra el jefe político del partido llamado "Nombre de Dios," que lo juzgó como reo de robo con asalto en despoblado y lo condenó á la última pena.

PEDIMENTO FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El C. Geje superior de Hacienda del Estado, encargado de llevar la voz fiscal, dice: que el reo Francisco Ruiz y Nájera ha promovido este juicio de amparo, manifestando, que se ha violado en su persona la garantía que otorga el art. 13 de la Constitucion general de la República. Esta garantía consiste, en que ningun ciudadano puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales; mas como para los salteadores y plagarios estan suspensas entre otras garantías la que en este caso invoca á su favor el quejoso, y como esta suspension está consignada en la ley espo